

Bien invertidos, los cobros verdes pueden revertir el deterioro ambiental.

LORENZO J. DE ROSENZWEIG P.

lorenzo@terrahabitus.org.mx



Impuestos verdes y buen Gobierno

¿Abordaría usted un avión, para emprender un largo viaje, con una tripulación que carece de habilidades aeronáuticas, pero que fue seleccionada por el voto popular para hacerlo? ¿Operaría sus ojos, su corazón o su columna vertebral, con un equipo de doctores cuyos méritos y práctica médica son limitados, pero fueron elegidos para la tarea a través de un proceso de simulación democrática?

¿Dejaría usted a sus hijos o nietos encargados con una familia disfuncional, en la que el padre, la madre, los hermanos y las hermanas no se hablan, pelean a diario y privilegian el interés propio, en vez de negociar con sensatez el presupuesto doméstico por el bien de todos?

Si la respuesta es no, ¿entonces por qué los ciudadanos permitimos que tareas tan importantes y complejas como gobernar una ciudad, un Estado o incluso un país, sean la responsabilidad de personas y Gobiernos cuya prioridad no es nuestro bienestar, y que además carecen del compromiso, las habilidades y la experiencia necesaria para desempeñar su trabajo?

Son reflexiones básicas que revelan un estado lamentable al que, de decepción en decepción, nos hemos acostumbrado, perdiendo nuestra capacidad de asombro e indignación como ciudadanos.

¿Es acaso tan difícil ser coherente y apto para atender de manera seria y sistemática las necesidades más apremiantes de nuestras ciudades y de nuestro Estado?

La esencia o atributo clave de un buen

sistema de Gobierno es la transparente y efectiva administración de nuestros impuestos y la gestión de bienes públicos como el agua, los ecosistemas, la atmósfera, el sistema de infraestructura y movilidad urbana y otros bienes inmateriales como los cuidados, la salud, la seguridad y las oportunidades de recreación.

En materia ambiental, la Zona Metropolitana de Monterrey tiene tres grandes retos. No son los únicos, pero sí son tan importantes, que no resolverlos coarta nuestro futuro. Se trata del abasto regular de agua, la mejora de la calidad del aire que respiramos y el aseguramiento de la movilidad urbana con sistemas de transporte funcionales y sustentables.

Un reciente estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. ubica a Nuevo León en el lugar número 4 a nivel nacional en cuanto a competitividad. Sin embargo, al desagregar los indicadores, el correspondiente a sociedad y medio ambiente nos ubica en el sitio número 14 de 32, afectando significativamente nuestra calificación integral.

En este sentido, un recurso clave para atender estos retos ambientales a escala es el cobro de impuestos verdes.

Los impuestos verdes, también conocidos como impuestos ambientales, son instrumentos fiscales diseñados para mitigar impactos ambientales, incentivar comportamientos sostenibles y desincentivar actividades que afectan nuestro entorno natural. En el contexto de Nuevo León y

el noreste de México, este tipo de impuestos generan beneficios, tanto ambientales como económicos, cuando son aplicados correctamente por las autoridades y ejercidos posteriormente en proyectos o programas efectivos, transparentes y cuyo impacto es medible y contribuye a la regeneración ambiental de nuestro Estado.

Los cobros o impuestos verdes, bien invertidos, pueden multiplicarse con partidas provenientes de fuentes internacionales que, al alinearse con efectividad, transparencia y una visión de largo aliento, tienen la capacidad de revertir el deterioro ambiental a escala.

Como ejemplo, un esfuerzo sistémico y colaborativo de la sociedad civil con entidades públicas como Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y las Secretarías de Finanzas y Medio Ambiente de Nuevo León, permitiría crear y operar un fondo ambiental estatal público-privado que generaría recursos para proteger el ciclo hídrico con acciones de conservación en cuencas y zonas prioritarias para la recuperación de acuíferos. Al mismo tiempo aseguraría un financiamiento estable y suficiente para la gestión actual y futura de la red de áreas protegidas estatales, tan rezagada en comparación con otras entidades federativas de México.

La distracción de este importante recurso en acciones ajenas a la conservación y la resiliencia ambiental del Estado ha sido tema reciente en los medios. Menos del 5 por ciento de los cobros verdes es aplicado en acciones ambientales efectivas. Los ciudadanos informados pueden y deben sumarse, a través de la sociedad civil, a los esfuerzos de un Gobierno funcional, receptivo y efectivo. Esto permitirá complementar y acompañar procesos de política pública y crear instituciones capaces de cuidar nuestra única casa, y así construir un futuro seguro y habitable para todos los neoleonenses.

El autor es consejero del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey.